

21-III-90

Hoy, México Puede y Tiene que Cambiar en paz

Violencia, Símbolo de Atraso

- ★ Lo de Guerrero y Michoacán no Debíó Haber Ocurrido
- ★ Inevitable, el Paso del Autoritarismo al Pluralismo
- ★ Auténticamente Modernos, Sólo los Comicios Creíbles

LORENZO MEYER

Se ha dicho que la violencia política es la partera de la historia. Desafortunadamente la afirmación anterior ha sido particularmente cierta en México, país donde todos los grandes cambios políticos han sido acompañados de la violencia. Sin embargo, hecho tan contundente como trágico no debe ser considerado como algo inevitable y menos aún, deseable. Hoy, México puede y debe cambiar en paz.

Una vida política civilizada es posible en México, aunque por ahora no pareciera ser el caso, como lo demuestran Guerrero y Michoacán. Para vivir realmente en un Estado de derecho, es indispensable que los intereses creados acepten que ya no hay alternativa al cambio, que quiérase o no, ya resulta inevitable que México pase del autoritarismo al pluralismo. La resistencia al cambio, y la violencia que ésta puede traer consigo, puede retrasar pero difícilmente evitar, que México transite de un sistema político basado en la existencia de un partido de Estado controlado enteramente por la Presidencia a otro, plural y basado en el respeto al voto y la competencia real y honesta de los partidos.

Por razones éticas e incluso estéticas, los arquitectos de la modernización neoliberal mexicana deberían resistir su natural inclinación por llevar a sus adversarios más contumaces —en este caso los cardenistas— a callejones sin salida. Esa política no sólo es antidemocrática —hecho al que nuestra élite del poder puede ser indiferente— sino que, a la larga, es también impráctica, y, finalmente, resulta un claro indicador de premodernidad. Si México, como recientemente declaró el presidente ante el primer ministro de Canadá (el posible compañero en la integración del mercado de América del Norte), se encuentra efectivamente “en la vanguardia de las transformaciones mundiales”, entonces lo que hoy sucede en Guerrero y Michoacán no debería haber ocurrido.

★

La ocupación armada de alcaldías por parte de una oposición que tiene razones sólidas para sospechar que las elecciones de diciembre en Guerrero y Michoacán no fueren limpias, resulta, a la vez, un hecho comprensible pero inaceptable. A estas alturas del desarrollo político mexicano, es

evidente —o al menos debería serlo— que las formas tradicionales de gobierno en México han dejado de tener viabilidad y que su fin es inevitable. En efecto, hoy ya no es necesario, práctico y menos justo, que una vez más la violencia sea la partera del cambio mexicano. Cuando en la Europa del Este o en Nicaragua sistemas de partido “prácticamente único” como el de México cambian radicalmente de naturaleza en un abrir y cerrar de ojos y de manera pacífica o casi, la violencia política en México como resultado de procesos electorales sin transparencia, resulta ya un anacronismo, un símbolo de atraso, de ausencia de modernidad.

En la visión dominante de nuestro pasado —así como en la teoría social latinoamericana que hasta no hace mucho dominaba los medios académicos de la región—, la violencia política revolucionaria aparecía como algo que era, a la vez, inevitable, justo, positivo y heroico. En efecto, dada la magnitud de la injusticia en las situaciones prerrevolucionarias latinoamericanas —la explotación colonial, la resistencia de la iglesia a la modernización liberal, la dictadura de los terratenientes porfi-

ristas, en el caso mexicano—, el cambio político debió hacerse a punta de lanza, machete, mauser o metralletas, y cumplir así con la demanda de una justicia sustantiva. Quizá esa visión sobre el papel histórico de la violencia en nuestro subcontinente es correcta, pero posiblemente también lo es el concluir que, finalmente, el resultado de la violencia revolucionaria en los siglos XIX y XX terminó por no corresponder a la magnitud del sacrificio que exigió. Las revoluciones triunfantes en Latinoamérica —y aún más las fallidas— prometieron mucho pero lograron poco. Es hora de intentar el camino contrario que el desarrollo a escala mundial hace posible: minimizar la violencia y maximizar los cambios.

Hoy, la teoría política latinoamericana —esa que se está desarrollando lo mismo aquí que en Chile, Argentina o Brasil— parece estar cada vez menos interesada en explorar la vía del cambio revolucionario y más por examinar al detalle las posibilidades del cambio no muy heroico, paulatino pero seguro, de los sistemas electorales, los partidos políticos y los movimientos sociales. En po-

cas palabras, ahora el interés de la ciencia y la práctica políticas en nuestra región se centra en las estrategias para maximizar las probabilidades de hacer de la democracia política la forma dominante de organizar la relación entre las distintas clases y grupos sociales.

Es cierto que en la realidad cotidiana de nuestro subcontinente la violencia sigue muy presente. En Guatemala los escuadrones de la muerte se mantienen activos, en El Salvador persiste la lucha brutal entre la insurgencia y el ejército. En Nicaragua la “contra” aún está armada y en pie de guerra en la región fronteriza con Honduras. En Colombia, el poder de los ejércitos privados de los narcotraficantes siguen desafiando al gobierno, y pese a la entrega de las armas del M-19, otros grupos guerrilleros también permanecen en armas. En Perú, Sendero Luminoso persiste en su acción directa contra todos los que no están con él, sean éstos de derecha, centro o izquierda. Sin embargo creo que esa realidad de la política de la violencia ya no es la realidad profunda de América Lati-

na, sino que es un trágico remanente de un pasado que se está quedando ya sin futuro.

De la misma manera que tanto Pinochet como las guerrillas peruanas o colombianas se han hecho súbitamente anacrónicos, también resulta ya fuera de época la forma en que el gobierno mexicano conduce el proceso electoral, y la consecuente violencia que produce su incapacidad de llevar a cabo elecciones en donde los sistemas de cómputo no se "caigan" o donde los resultados se den de inmediato y resulten congruentes con la realidad. Esta no debería ser la hora de la ira, de alcaldías ocupadas por la fuerza de las armas por la población local y de otras retomadas a tiros por la policía, sino la de la consolidación de un verdadero sistema competitivo y moderno de partidos. Si fue posible tanto en Nicaragua, como en la Alemania Oriental o en la Unión Soviética llevar a cabo votaciones ordenadas, con resultados que se conocieron en 24 ó 48 horas y que ni los perdedores pusieron en duda, entonces lo mismo debería ser posible en México.

El resultado histórico del

régimen autoritario postrevolucionario mexicano no es enteramente negativo. Después de todo, le dio al país una estabilidad aún no igualada en ninguna otra parte de América Latina. En su mejor momento, el presidencialismo montado en el entonces formidable triángulo CNC, CTM y CNOP, fue quizá más benéfico que negativo para México. Sin embargo, hoy claramente ya no es ese el caso. En la actualidad resulta absurdo, por no decir ridículo, estar pensando, por ejemplo, en la integración del gran mercado de la América del Norte, cuando a la vez en Cruz Grande, Guerrero, se tiene una especie de repetición de la tragedia porfirista de Tomóchic, pues una fuerza armada muy superior a la de los rebeldes tiene que tomar a sangre y fuego la alcaldía local porque simplemente no fue posible hacer que en su momento los votos y no las balas resolvieran la disputa local por el poder. En esas condiciones, ¿cómo hablar de tú a tú con Canadá y Estados Unidos como pretenden los jóvenes modernos y modernizadores gobernantes mexicanos? ¿Cómo confiar en la ade-

cuada solución de los grandes problemas políticos que entraña la anunciada integración económica con los "colosos del norte" cuando no fue posible resolver de manera institucional, rutinaria e incruenta los de Coyuca de Benítez?

★

En diciembre del año pasado —y pese a la experiencia de julio de 1988— el Gobierno Federal consideró que una política de apertura democrática selectiva bastaría para cumplir con las demandas internas e internacionales de modernización política. De ahí que a cambio de aceptar una entrega sin resistencia de Baja California a la "oposición razonable" (el PAN), el gobierno central se propuso sostener el triunfo del PRI a como diera lugar en los estados donde la "oposición irracional" (el PRD) era fuerte: Michoacán y Guerrero. Se supone que tan salomónica decisión tenía, entre otras cosas, un propósito didáctico: recompensar con zanahoria a quien se mostraba dispuesto a negociar en los términos del gobierno y castigar con garrote al que no. Desafortunadamente no se tomó en cuenta que Guerrero, pese a ser una de las regiones económicamente más atrasadas del país, es un estado de gran complejidad política y con una interesante y consistente historia de oposición y conflicto con el gobierno central. En menor medida, lo mismo se puede decir de Michoacán, entidad donde se sobreestimó la capacidad del Gobierno Federal para anular al cardenismo en su propio terreno.

Si realmente hay capacidad de aprender de los errores en la presidencia, en el Gobierno Federal, en las administraciones estatales y en la misma oposición, entonces se debería abandonar en todos los casos la idea de ganar a como dé lugar el aquí y ahora para no poner en peligro el futuro. Es indispensable llegar a un compromiso inmediato y definitivo que detenga la violencia política e impida que ésta se vuelva costumbre y que se pierda el control de la acción de las bases por parte de los liderazgos. Sin embargo, para lograr este compromiso se debe partir de otro tan sencillo como fundamental: el gobierno deberá conducir el proceso electoral de una manera distinta a la acostumbrada, es decir, éstas deberán estar libres de fraude y ser transparentes, creíbles y, por tanto, auténticamente modernas.

Se dijo antes y con mayor razón se puede repetir ahora: la única salida constructiva para el viejo y anquilosado autoritarismo mexicano es su transformación sin regateos en un sistema democrático. Entre más se retrase el aspecto político de nuestra modernización mayores también las trabas al resto del proyecto, incluido el cambio económico, y menor la credibilidad interna y externa del discurso presidencial. Finalmente, entre más arrastre los pies el sufragio efectivo mayores serán las posibilidades de que la violencia tome el lugar que le corresponde a la legalidad.